

obispo de Nuevo Leon, Doctor D. Andrés Ambrosio Llanos y Valdez, para habitación, sin pagar renta, de personas pobres que no tuvieran con qué hacer ese pago, el Ayuntamiento á cuyo cargo estaba la finca como perteneciente á la Beneficencia, la adjudicó á D. Mariano y D. José Brito, quienes han arrojado de ella á los promoventes, violándose en sus personas con esa enajenación la garantía que les otorga el art. 27 de la Constitución Federal. Visto el informe del Ayuntamiento de México, responsable del acto que se reclama; los documentos y pruebas que se han presentado; el pedimento del Promotor fiscal; el alegato de la parte actora y la sentencia del juez 1º interino de Distrito, con todo lo demas que consta de autos y fué necesario tener presente.

Considerando: que las quejas no tienen propiedad ninguna en la finca de que se trata, pues solo se las permitia vivir gratuitamente y á voluntad, primero del cura de Santa Catarina Mártir, que era el patrono de la obra pia, y despues del Ayuntamiento encargado de la Beneficencia, y que en tal concepto la enajenación que han reclamado no constituye violencia al derecho que deducen invocando la garantía de la propiedad, otorgada por el art. 27 de la Constitución de la República. Con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Es de revocarse y se revoca la sentencia que el juez 1º interino de Distrito de México pronunció en esta capital á 12 de Setiembre próximo pasado, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Salcedo y á las señoras quejas contra el acto que motivó el presente recurso de amparo.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de que proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre 18 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Guerrero por los Sres. H. Kastan y Cº contra la disposicion del C. visitador de la renta del papel sellado, por la cual se les manda multar en una cantidad de pesos.

#### PRDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que el Sr. Greguar como visitador de la Aduana subalterna de la renta del papel sellado de este puerto, y cumpliendo con las instrucciones que recibió de la Administración general del ramo, ordenó á aquella que por sí ó por el empleado que comisionase y acompañado del escribiente de la misma visita, Sr. Schafno, procediera á la de todos los establecimientos industriales y comerciales, para asegurarse de que sus libros estaban sellados con arreglo á las leyes. Al practicar la visita en la casa de los Sres H. Kastan y Cº, estos señores se negaron á presentar sus libros, siendo necesario para que lo efectuaran, segun asienta el señor visitador en su informe, que vd. interviniese, auxiliándolo y obsequiando la solicitud verbal que en ese sentido le hizo.

Por esa resistencia, el O. visitador, con la misma fecha, previno al administrador de la renta, que con arreglo al art. 60 de la ley de 14 de Febrero de 1856, impusiera á los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup> la multa designada por la falta de sellos, que es la del cuádruplo del valor de aquellos. El administrador, cumpliendo con lo mandado por la visita y en vista de la resolución que le dió con fecha 30 del mismo Agosto á la consulta que le dirigió, procedió á cobrar y hacer efectiva la pena impuesta; pero los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup> ocurrieron á ese Juzgado interponiendo el recurso de amparo contra la providencia de la visita, alegando que ella viola la garantía concedida por el art. 16 de la Constitución Federal.

Estos son los hechos, segun aparece del escrito de los quejosos, fojas 1<sup>a</sup>; del informe del O. visitador, fojas 9 y 10, y de los documentos que á él acompaña marcados con los números 1, 3, 4 y 8.

En mi pedimento del día 4 de este mes, que corre á fojas 4 y 5, dije: que del informe del O. visitador de fecha 3 (fojas 3) resultaba la duda de si la multa había sido impuesta á los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup> por el O. Administrador, segun aquel afirmaba; pero esa duda está desvanecida por la comunicacion que en copia acompaña á su segundo informe, marcada con el número 4, fecha 7 de Agosto, pues de ella consta, que la visita ordenó al O. Administrador que impusiera á los referidos señores la pena contra que estos reclaman; la providencia, en consecuencia, fué dictada por el O. visitador y el administrador no es en este caso mas que el ejecutor de ella.

Aclarada esta duda, entro á examinar las dos cuestiones que en mi concepto se presentan aquí: sea la primera: ¿el O. visitador es autoridad competente para imponer á los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup> por la resistencia á presentar sus libros la multa á que se contrae su oficio de fecha 7 de Agosto?

El art. 60 de la ley de 14 de Febrero de 1856, en su primera parte, dice: que en virtud de la obligacion que los administradores del papel sellado tienen de perseguir el fraude que se cometa contra la renta cuando tengan motivos fundados para sospechar algun fraude ó omision requieran á los dueños ó encargados de toda clase de establecimientos etc, para que hagan la manifestacion de los libros ó documentos sobre que recaiga la sospecha. Si despues del requerimiento, agrega, hubiere resistencia por parte de los interesados para la manifestacion de que se trata, los administradores de la renta, aun en el caso de tener evidencia de cualquiera infraccion, ocurrirán á los respectivos jueces de hacienda ó á la autoridad, quienes desde luego procederán á formar la averiguacion conducente á descubrir el fraude, que se castigará con la pena que señala esta ley.

Segun esta disposicion, al resistirse los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup> á manifestar sus libros á los empleados comisionados al efecto, no tocaba al O. visitador presentarse personalmente á tratar de vencer esa resistencia, sino ocurrir al juez de hacienda para que este procediera con arreglo á la prevencion trascrita; esto es, á averiguar el fraude ó imponer la pena; y debiendo tomar conocimiento el Juzgado del asunto, y ser el que debía proceder desde el momento en que los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup> resistieron la presentacion de sus libros, desde ese momento tambien cesaba toda intervencion en el particular, del visitador ó administrador.

El O. visitador asienta en su informe, que ocurrió verbalmente á vd.; que lo acompañó á la casa de los Sres. Kastan y C<sup>a</sup>, y que por sus instancias desistieron aquellos de su resistencia; pero en primer lugar, no resulta constancia de esto en los autos; en segundo, el procedimiento, si es cierto, fué ilegal por su parte, porque el O. visitador no debió

haber ocurrido al juez verbalmente solicitando simplemente su auxilio para vencer la resistencia de los referidos señores, sino darle conocimiento del hecho para que procediera conforme á lo mandado en el art. 60 de la ley citada.

Y si concedemos al C. visitador que en cumplimiento de la ley y con arreglo á sus prevenciones ocurrió al Juzgado, entonces, ¿el tiene que conceder por su parte que el juez y no él, era el único competente para imponer la pena á que hubiere lugar.

De suerto, que se puede formar este dilema: el señor visitador, supuesta la resistencia de los Sres. H. Kastan y C<sup>ía</sup> á exhibir sus libros, ocurrió ó no al juez de hacienda según previene la ley? De cualquiera de esas dos proposiciones que conceda ó niegue, resulta probada la ilegalidad de su procedimiento, su incompetencia para imponer la pena referida.

En otro oficio dirigido por el C. visitador al administrador de la renta, con la misma fecha 7 de Agosto, que en copia acompaña con el número 5, le dice: que el castigo que impone el art. 60 de la susodicha ley, *debe ejecutarlo el Juzgado de Distrito.*

Esto no es exacto: primero, porque como el Juzgado de Distrito, según la disposición referida, es el competente para formar la averiguación en descubrimiento del fraude, justificado este, el mismo Juzgado es á quien únicamente corresponde imponer la pena, sin que pueda convertirse en mero ejecutor de la impuesta por el visitador ó administrador; y segundo, porque si en las facultades de uno ó otro, del visitador ó administrador, estaba imponer á los Sres. Kastan y C<sup>ía</sup> la pena en cuestión, entonces en sus atribuciones está ejecutarla, usando de la facultad coactiva que concede el art. 61 de la misma ley, y con arreglo á las de 11 de Diciembre de 1871, 20 de Noviembre de 48 y 20 de Enero de 37.

No creo que sea ahora oportuno investigar, si la segunda parte del art. 60 en que el visitador funda sus procedimientos, es ó no aplicable al caso; si son distintos el á que se refiere esta misma segunda parte del que supone la primera; si en ambos la simple resistencia se castiga con la pena que impone el art. 48, ó si en el de la primera parte no hay pena para ella, sino solo para el fraude, resultando justificado. La cuestión aquí, á mi juicio, es solo la de saber, como he asentado antes, si el visitador es ó no competente para imponer la pena contra que se reclama; y supuestos los fundamentos y razones expuestos, no se puede resolver sino negativamente.

La segunda cuestión es, si por la Orden dada por el C. visitador de la oficina subalterna del papel sellado en este puerto al C. administrador de ella, de imponer á los Sres. H. Kastan y C<sup>ía</sup> la pena que señalan los artículos 48 y 60 (en su segunda parte) se viola alguna de las garantías individuales.

Entre las que consigna la Constitución Federal en su título 1º, sección 1ª, se encuentra la que designa el art. 16 que según él consiste, en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, *sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente etc.*

Luego si una que no lo es da alguna Orden contra el individuo, su familia, domicilio, papeles y posesiones, esa autoridad viola y ataca la garantía concedida por ese art. 16, que quiere que ninguna autoridad traslimite sus facultades, que ninguno salga de la órbita que le esté señalada por la ley; que ninguno se exceda de sus atribuciones invadiendo las que á otro competen. Este artículo tiende á poner á cada uno á cubierto de los vejámenes y tropelías de que con tanta frecuencia éramos víctimas antes de nuestra Carta fundamental y de la ley

de 20 de Enero de 1869, que reglamenta el recurso concedido contra las autoridades que violen alguno de los derechos del hombre.

De suerte que siempre que una autoridad da una orden que no es de su competencia, porque segun la ley sea de la de otra, habrá violacion de alguna de las garantías individuales y por consiguiente lugar al amparo.

En el caso del presente juicio, si examinando la legalidad de la orden dada por el C. visitador para multar á los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup>. apoyado en la misma ley en que se funda su providencia, le negado su competencia, porque la ley misma la concede solo al Juzgado de hacienda, consecuencia precisa es, que ahora afirmo que esa disposicion del C. visitador viola la garantía que concede el art. 16 de la Constitución Federal, segun la que nadie puede ser molestado en su persona ó bienes, *sino por orden de autoridad competente*.

Dar esta resolucion á esta segunda cuestion es lógico, supuesto la dada á la primera, y en tal concepto no estimo necesario entrar en largos razonamientos para fundarla.

Antes de concluir debe hacer una observacion sobre el último párrafo del informe del C. visitador: refiriéndose al auto de ese Juzgado del dia 4 en que se mandó suspender el auto reclamado, dice: que apela de él y que se le dé testimonio certificado de todas las diligencias practicadas: esto es impertinente; primero, porque no es parte el C. visitador en este juicio, y segundo, porque el auto referido no es apelable.

Por lo expuesto concluyo pidiendo á ese Juzgado que pronuncie sentencia declarando:

1<sup>o</sup> Que la Justicia de la Union ampara á los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup> contra la orden dada por el C. visitador de la oficina del papel sellado en este puerto, su fecha 7 del pasado Agosto, impo-

niéndoles por su resistencia á presentar sus libros la pena que señala el art. 48 de la ley del 14 de Febrero de 1856.

2<sup>o</sup> Que se notifique á quienes correspondan, y se mande publicaren el periódico oficial del Estado.

3<sup>o</sup> Que sin nueva apelacion se dé cuenta á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion con este expediente original, para los efectos del art. 13 de la ley de 20 de Enero de 1869.

4<sup>o</sup> Que la parte reponga el papel comun que se ha actuado con el sellado correspondiente.

Acapulco, Setiembre 9 de 1872.—*L. de Miguel Donde*.

SEMPRENCIA del Jefe de Distrito

Acapulco, Setiembre 23 de 1872.—

Visto el juicio de amparo promovido por los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup> de comercio de este puerto, por la violacion de garantías hecha en su persona por el C. visitador de la oficina subalterna de la renta del papel sellado en este puerto, Eduardo Greguar, á consecuencia de la orden dada al C. administrador de la propia renta, de imponer á los señores expresos la pena que señalan los artículos 48 y 60 de la ley de 14 de Febrero de 1856, por haberse negado á presentar sus libros al practicar la visita por la causa mencionada. Vistos los fundamentos del recurso de amparo, deducidos de la fraccion 1<sup>a</sup> de la ley de 20 de Enero de 1869; vistos los informes rendidos por el C. visitador, y los documentos que acompañó al que con fecha 8 del presente rindió sobre este asunto; visto el pedimento del C. Promotor fiscal, que considera en el caso presente violadas las garantías individuales que otorga la Carta fundamental en su título 1<sup>o</sup>, seccion 1<sup>a</sup>, art. 16, que pide se declare en consecuencia y en vista de las razones y

fundamentos que expone, primero: que la Justicia de la Union ampara á los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup> contra la órden dada por el O. visitador de la oficina del papel sellado en este puerto, fecha 7 del pasado Agosto, y que corre á fojas 11 vuelta del expediente, imponiéndoles por su resistencia á presentar sus libros la pena que señala el art. 48 de la ley de 14 de Febrero de 1856; segundo, que se notifique á quienes corresponda y se mande publicar en el periódico oficial del Estado; tercero, que sin nueva citacion se dé cuenta á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion con este expediente original para los efectos del art. 13 de la ley de 20 de Enero de 1869, y cuarto; que la parte reponga el papel comun en que se ha actuado con el del sello correspondiente. Visto todo lo demas que debió tenerse presente, consta en autos, fué de verse y ver convino, y considerando: que la multa impuesta á los Sres. H. Kastan y C<sup>a</sup>, lo fué por el O. visitador de la oficina de papel sellado de este puerto, Eduardo Greguar, segun consta por la comunicacion del mismo O. visitador dirigida al administrador de dicha renta, fecha 7 del pasado Agosto.

Considerando: que entre nosotros nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por autoridad competente y con las garantías de los arts. 20 y 21 de la Constitucion de la República.

Considerando: que el expresado visitador no es la autoridad competente para imponer la multa referida; supuesto que el artículo 60 de la ley de 14 de Febrero de 1856, en el cual se apoya, dice: "que en virtud de la obligacion que los administradores del papel sellado tienen de perseguir el fraude que se cometa contra la renta, cuando tengan motivos fundados para sospechar algun fraude ú omision, requerirán á los dueños ó encargados de toda clase de establecimientos etc., para que hagan la manifestacion de los libros ó documentos sobre que recaí-

ga la sospecha. Si despues del requerimiento hubiere resistencia por parte de los interesados para la manifestacion de que se trata, los administradores de la renta, aun en el caso de tener evidencia de cualquiera infraccion, ocurrirán á los respectivos jueces de hacienda etc., quienes desde luego procederán á formar la averiguacion conducente á descubrir el fraude, que se castigará con la pena que señala esta ley."

Considerando: que segun este artículo, el conocimiento y averiguacion del fraude corresponde exclusivamente al poder judicial; y la aplicacion de las penas es exclusiva de dicha autoridad, y que estas deben ser el resultado de un proceso legal, en el cual al acusado, el artículo 20 de la Constitucion le concede las garantías que él señala, sin que ninguna autoridad pueda mezclarse en sus atribuciones.

Considerando: que el mismo visitador manifiesta en su otro oficio fecha 7 de Agosto, que corre á fojas 12 del expediente, que el castigo que impone el artículo 60 de la susodicha ley debe ejecutarlo el Juzgado de Distrito, con lo cual reconoce la autoridad judicial, aun cuando quiere que lo que expresa se tome en el sentido solo de que el Juzgado debe ser el ejecutor y no el competente, porque en primer lugar, solo el Juzgado segun la ley expresada es el único competente, y en segundo, porque si el visitador lo fuera no tendria intervencion alguna el Juzgado, supuesta la facultad económico-coactiva que concede el artículo 61 de la propia ley, con arreglo á las de 11 de Diciembre de 1871, 20 de Noviembre de 1838 y 20 de Enero de 1837.

Considerando: que la fraccion 2<sup>a</sup> del expresado artículo 60, se refiere á caso diverso del que nos ocupa; que solo se trata de saber quién es la autoridad competente para estos asuntos; y que estando señalado por la ley el poder judicial,



él es el único que puede, en casos como el presente y con arreglo al expresado artículo y al 16 de la Constitución, proceder conforme á derecho.

Considerando: que siempre que se viola alguna de las garantías individuales, hay por consecuencia lógica, legal y precisa, lugar al amparo, con arreglo á nuestra Carta fundamental y á la ley de 20 de Enero de 1869, que concede este recurso contra las autoridades que violan cualquiera de los derechos del hombre.

Considerando: que segun el expresado artículo 16 de la Constitución, nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, familia, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente etc.: cuando alguno lo fuere por una autoridad incompetente, esta viola y ataca esa garantía.

Considerando: que en el presente caso, no siendo el visitador el competente para imponer la multa de que se trata, segun la ya referida ley de 14 de Febrero de 1856, al proceder de la manera que lo hizo ha violado la expresada garantía del artículo 16, y considerando finalmente la necesidad que hay de conceder el amparo, por tales consideraciones, de conformidad con el pedimento del C. Promotor Fiscal y fundado en los artículos 101 y 102 de la Constitución general de la República y 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, definitivamente juzgando debia de fallar y fallo:

Primero; que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres H. Kastan y C<sup>a</sup> en el goce de las garantías que otorga á todo ciudadano el artículo 16 de la Constitución general, que ha sido violado por el C. visitador al imponer á dichos señores la pena que señala el artículo 48 de la ley de 14 de Febrero de 1856, por haberse negado á presentar sus libros.

Segundo; hágase saber esta resolución á quienes corresponda, publíquese en el periódico oficial del Estado segun lo prevenido en el artículo 27 de la ley de 20

de Enero de 1869, y remítase el testimonio respectivo al "Semanario Judicial de la Federación" para los expresados efectos.

Tercero: notifíquese á los Sres H. Kastan y C<sup>a</sup> repongan el papel comun que se ha invertido en estas actuaciones con el del sello correspondiente, y cuarto finalmente, remítanse estos autos á la Corte Suprema de Justicia de la nacion para los efectos legales.

Así definitivamente juzgando, yo, el C. juez de Distrito de este Estado de Guerrero Lic. Agustin Diez de Bonilla, lo proveí y firmé con los testigos de asistencia por falta de escribano; doy fé.—  
*Lic. Agustin Diez de Bonilla.*—*A. M. G. Verdiguél.*—*A. F. Estrada.*

#### EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 15 de 1872.—Visto el juicio de amparo que en 2 de Setiembre del corriente año, promovieron en Acapulco ante el juez de Distrito del Estado de Guerrero los Sres H. Kastan y C<sup>a</sup> contra la disposicion del visitador de la renta del papel sellado, por la cual se les mandó multar en una cantidad de pesos, á virtud de haber resistido mostrar sus libros á la visita que fué á examinarlos por órden de dicho visitador, alegando los quejosos: que esa resistencia la opusieron por no haber conocido desde luego á los visitadores que se presentaron en su casa; pero que al fin les presentaron los libros que fueron encontrados en regla; y que la multa referida es una violacion de la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución de la República, porque el visitador que la dispuso no obra conforme á la ley de 14 de Febrero de 1856. Visto el informe del C. visitador E. Greguar, responsable del acto que se reclama, apoyando sus procedimientos en la ley de Febrero que se

acabó de citar los documentos justificativos que acompañan los pedimentos del Promotor Fiscal: y la sentencia del juez de Distrito, en la que atento á que el visitador segun el artículo 69 de la misma ley de 14 de Febrero, no es autoridad competente para imponer la multa que impuso invocando ese artículo, declara violada en la persona de los quejosos la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución que han citado, y con apoyo en la ley de 29 de Enero de 1869 concede el amparo que han pedido. Por el fundamento legal del juez y en virtud de la disposición de Enero en que se apoya, se resuelve lo siguiente: Los de confirmarse y se confirman la sentencia que pronunció en 23 de Setiembre próximo pasado declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. H. Kastan y O<sup>a</sup> en el goce de la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución Federal, que ha sido violada por el C. visitador, al imponer á dichos Sres. la pena que señala el artículo 48 de la ley de 14 de Febrero de 1856 por haberse negado á presentar sus libros.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos correspondientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y Armonen.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Arceaga*.—*P. Ordaz*.—*Ignacio Ramírez*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Auri*.—*S. Guzman*.—*Luis Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José Aurea Ramírez*.—*Luis M. Aguilar*, Secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre 21 de 1872.—*Edu. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO interpuesto ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por los C.C. Antonio y Pedro Camacho, contra actos de la Prefectura del Distrito de San Juan del Río, por violación de garantías.

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor dice: que Antonio y Pedro Camacho han sido aprehendidos como receptadores de ladrones, por la Gefatura política de San Juan del Río, imponiéndoles á la vez una multa de doscientos pesos, y consignándolos á la autoridad respectiva para que los juzgue.

Aparte de no ser nuevo para tomar venganza de enemigos políticos, el considerarlos como reos del orden comun, como parece trata de hacerlo en el caso el C. Prefecto de San Juan del Río, desde luego se palpa su anticonstitucional procedimiento que viola en consecuencia las garantías individuales.

Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en juicio se le absuelva ó se le condene (artículo 24 de la Constitución). De aquí se infiere rectamente, que nadie puede ser condenado á sufrir una pena y puesto por el mismo delito á disposicion del juez, para que vuelva á formarle causa. Solamente á individuos para quienes el ejercicio de la autoridad no es un sagrado depósito, sino un título de arbitrariedad, puede ocurrírseles ó por refinada malicia, ó por supina ignorancia, el proceder de manera que á la pena administrativa se agregue la judicial, y que una condenacion sea el principio de una nueva causa.

Mientras la autoridad ande en semejantes manos, no faltarán los juicios de amparo, que son un remedio despues de que ya se han vulnerado los derechos de los ciudadanos. ¿No valdria mas que esos derechos se conservaran ilesos? *Mellius est intacta jura servare, quam*